



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta N° 40

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA y otra
Demandado: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Radicado N°: 05001-31-05-020-2018-00261-01 (20-138)

En Medellín, siendo los once (11) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021), los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **CARLOS JORGE RUÍZ BOTERO**, resuelven los recursos de apelación propuestos por la parte demandante y la entidad pública accionada, así como el grado jurisdiccional en favor de la última, dentro del proceso ordinario instaurado por **MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA** en contra de **COLPENSIONES**, en el cual interviene como tercero *ad excludendum* la señora **ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ**, radicado bajo el N° 05001-31-05-020-2018-00261-01 (20-138).

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, en calidad de magistrado ponente, deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda,

1. ANTECEDENTES

Mediante gestor judicial, la señora MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA persigue el reconocimiento y pago de un porcentaje de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecido LUIS ALBERTO LARA HERRERA desde el 20 de diciembre de 2017, intereses moratorios o, en subsidio, la indexación, y las costas del proceso, basada en que contrajo matrimonio con el señor LARA HERRERA (q.e.p.d.) el 16 de julio de 1977 y quien falleció el 20 de diciembre de 2017, estando pensionado por vejez a cargo de la entidad accionada, de cuya unión nacieron 6 hijos, todos mayores de edad, sin estudios ni discapacidades al momento del óbito; que convivió con el señor LARA HERRERA,

compartiendo techo, lecho y mesa ininterrumpidamente hasta el año 1998, cuando se separaron de hecho debido a los maltratos, agresiones y abusos que ella y su hija recibieron por parte de él; que el 23 de enero de 2018 solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la entidad accionada, misma que la denegó mediante Resolución SUB 45984 del 23 de febrero de 2018, bajo el argumento de que no convivió con el *de cujus* durante los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento; que igualmente, se presentó a reclamar pensión de sobrevivientes la señora ANA TERESA GUTIÉRREZ ZAPATA en calidad de compañera permanente, a quien también se le negó la prestación en el acto administrativo en cita, por no acreditar el requisito de la convivencia con el causante al momento de su deceso.

La demanda fue admitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín mediante Auto del 8 de mayo de 2018 (archivo: 2020-09-30 pág. 85), ordenando su notificación y traslado a la accionada, y la citación en calidad de interviniente excluyente a ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, como compañera permanente del causante.

COLPENSIONES, contestó la demanda a través de apoderada judicial el 12 de junio de 2018 (ibíd. pág. 103 y ss), asintiendo que LUIS ALBERTO LARA HERRERA falleció el 20 de diciembre de 2017, su calidad de pensionado por vejez a cargo de dicha entidad; que la demandante contrajo nupcias con el señor LARA HERRERA, y que la demandante y la señora ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ reclamaron el reconocimiento de la pensión sobrevivientes, allende de que la misma fue denegada a ambas mediante acto administrativo. En adición, se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que la demandante no cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada.

ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, a través de poderhabiente judicial presentó demanda de intervención excluyente el 26 de julio de 2018 (ibíd. pág. 143 y ss), pretendiendo principalmente el pago del 100% de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecido LUIS ALBERTO LARA HERRERA o, subsidiariamente, de un porcentaje de dicha prestación económica, los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación y las costas del proceso, arguyendo que convivió con el señor LUIS ALBERTO LARA HERRERA (q.e.p.d.) durante más de 5 años hasta el momento del fallecimiento, acaecido el 20 de diciembre de 2017; que el pensionado fallecido percibía incrementos pensionales por tenerla como compañera permanente a cargo; que era beneficiaria en salud del causante; que el fallecido la tenía afiliada a los servicios funerarios en calidad de compañera permanente. Agrega, que por testamento el *de cujus* le dejó lo que tenía,

y que solicitó la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, la cual le fue negada mediante Resolución SUB 45984 del 23 de febrero de 2018.

1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 11 de marzo de 2020 (ibíd. pág. 502 y archivo: 050013105020 2018 00261 00 FALLO), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia condenó al COLPENSIONES a pagar a la demandante y a la interviniente *ad excludendum* la pensión de sobrevivientes a partir del 20 de diciembre de 2017, en un 80 % para la primera y un 20 % para la segunda, a la vez de autorizarla a realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud, y absolver a COLPENSIONES del pago de intereses moratorios, pero gravándola en costas del proceso.

1.3. APELACIÓN

La decisión adoptada fue apelada por los apoderados judiciales de la interviniente excluyente y de COLPENSIONES, en los términos que se precisan:

INTERVINIENTE EXCLUYENTE: Esgrime que la separación de hecho entre la demandante y el causante se dio realmente para el año 1999, cuando el causante salió de la cárcel, en vista de que mientras éste estuvo recluido la demandante aún lo visitaba, anualidad en la cual el causante ya no constituía amenaza de violación para sus hijas, razón por la cual la separación no se origina por culpa del causante, sino porque la demandante se fue a vivir donde la mamá y el causante donde sus padres, situación que determinó que la demandante debía demostrar que después de la separación continuaron los lazos afectivos con el causante, para poder ser beneficiaria de la prestación. En subsidio, afirma que el causante indicó testamentariamente que había convivido 15 años con la interviniente excluyente, por lo que el porcentaje de la pensión que le corresponde a su poderdante es del 60 %.

COLPENSIONES: Asentó que la demandante sostuvo ser la que sostenía económicamente el hogar, y siendo necesaria la dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes, la demandante no tendría derecho a tal prestación. En igual sentido, arguye que la interviniente excluyente no demostró convivir con el causante para el momento del deceso, en tanto sus afirmaciones y las de sus testigos

se contradicen al respecto, al indicar unas veces que el causante vivía en la casa de sus padres y otras que vivía con la interviniente (John Mario Londoño), mientras que a otros testigos (William) no le consta la convivencia al momento del óbito.

El apoderado judicial de COLPENSIONES en los alegatos de conclusión solicita que se revoque en su totalidad la sentencia condenatoria y en su lugar se absuelva de todas y cada una de las pretensiones invocadas por la demandante, ya que es clara la falta de requisitos para el acceso a la pensión, de confirmarse la decisión de instancia debe absolverse del pago de intereses moratorios dado que estos son improcedentes cuando la administradora de pensiones niega la pensión por existir disputa entre los beneficiarios. Así mismo debe absolverse de las costas procesales pues el actuar de la entidad se dio conforme a derecho y al principio de buena fe, ejerciendo su función de manera adecuada y en los tiempos establecidos por la normatividad.

1.4. CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de la COLPENSIONES, se examinará igualmente la sentencia en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta.

El apoderado judicial de MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA aportó oportunamente alegatos de conclusión en los que refiere se confirme íntegramente la sentencia de primera instancia, debido a que cumple con lo estipulado en la ley y en las distintas sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la interviniente excluyente y COLPENSIONES, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, e igualmente se revisará la sentencia de primera instancia en su integridad en virtud al grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad pública accionada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: 1) Si la sustitución pensional del señor LUIS ALBERTO LARA HERRERA (q.e.p.d.) debe ser distribuida a favor de la demandante como cónyuge y la interviniente excluyente como compañera permanente, y de ser así, 2) Si hay lugar a aumentar el porcentaje que le corresponde a la interviniente excluyente.

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **modificatorio** en cuanto al retroactivo por reconocer, y **confirmatorio** en lo demás, por haberse acreditado los requisitos legales para acceder a los derechos pensionales pretensos, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 20 de diciembre de 2017 (ibíd. pág. 51).

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado que fallezca. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que COLPENSIONES contestó la demanda aceptando que LUIS ALBERTO LARA HERRERA fue pensionado por vejez mediante Resolución n.º 104037 del 14 de mayo de 2012 (ibíd. pág. 407-408), reconocimiento que es reiterado igualmente en las consideraciones de la Resolución SUB 45984 del 23 de febrero de 2018 (ibíd. pág. 79).

Acreditado como está, que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, y cuya acreditación es carga procesal de los eventuales beneficiarios, tal

como lo adoctrina la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicación No 38213 del 28 de septiembre de 2010, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

Adicionalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1510- del 5 de febrero de 2014, radicación 42193, reiteró los lineamientos contenidos originariamente en la sentencia del 29 de noviembre de 2011 Rad. 40055, y precisó que la hipótesis del inciso 3° del literal b) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003 tiene aplicación también cuando se presente separación de hecho del cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, evento en el cual la convivencia de los 5 años de que trata la norma para el cónyuge supérstite puede ser cumplida en cualquier tiempo, sin que se exija que continúe actuante el vínculo afectivo al momento del fallecimiento como previamente exigía la Sala, en atención a lo recientemente adoctrinado por la Alta Corporación en sentencia SL5169-2019.

La calidad de cónyuge supérstite concurrente en la actora, y la vigencia del vínculo matrimonial al momento de la muerte del causante, está probada con el registro civil de matrimonio expedido con posterioridad al óbito del señor LUIS ALBERTO LARA HERRERA (ibíd pág. 37), según el cual contrajeron matrimonio católico el 16 de julio de 1977, sin que dicho documento contenga anotaciones sobre divorcio o nulidad del vínculo o liquidación de sociedad conyugal. Igualmente, se acreditó que al momento del fallecimiento, la demandante contaba con más de 30 años de edad (ibíd. pág. 33).

De forma que, el asunto que amerita un análisis probatorio más exhaustivo, es si la demandante cumple con el requisito legal de la convivencia, en tanto ya no es necesario analizar que el vínculo hubiere continuado actuante a la fecha del deceso, ni la culpabilidad o motivos de la separación de hecho (SL5169-2019), como erradamente lo esgrime el apoderado judicial de la interviniente excluyente, y menos aún, es necesario analizar la dependencia económica de la demandante respecto al causante, como equivocadamente aduce el apoderado judicial de COLPENSIONES, en tanto la ley no exige tal sujeción económica de la cónyuge supérstite para ser beneficiaria de la prestación por sobrevivencia.

De suyo que, para darse por acreditada tal convivencia, deberá establecerse si se demostró que la demandante convivió ininterrumpidamente con el causante, como mínimo, durante 5 años en cualquier época.

Con respecto al soporte acreditativo de este requisito, se tiene que la testigo YHOANA LARA BLANDÓN, hija del causante, afirmó que la demandante y el causante convivieron desde la celebración de su matrimonio, verificado el 16 de julio de 1977 (ibíd. pág. 37), hasta el año 1999, datas que coinciden con las conclusiones probatorias a las que arribó la entidad pública demandada al interior de la investigación administrativa, según la cual: “los implicados {demandante y causante} desde el 16 de julio de 1977 fecha de su matrimonio, hasta el año 1998, cuando se separaron definitivamente sin volver a convivir bajo el mismo techo.” (ibíd. pág. 162) En igual sentido, concluyó la *a quo* que la demandante y el causante convivieron durante 22 años, entre 1977 y 2019 (min. 21:50), sin que la interviniente excluyente ni Colpensiones objetara tal aserto conclusivo; por el contrario, al sustentar el recurso de apelación, el apoderado judicial de la interviniente excluyente hizo énfasis en que la demandante y el causante convivieron hasta el año 1999, asintiendo implícitamente lo concluido por la *a quo* en este punto.

Ello así, refulge palmar que la convivencia entre la demandante y el *de cujus* perduró más de los 5 años requeridos legalmente para ser beneficiaria de la prestación económica por sobrevivencia, tal y como la *a quo* lo sentenció.

De otro lado, en cuanto a la convivencia de la interviniente excluyente y el causante, la *a quo* estableció, con apoyo en la declaración rendida por WILLIAM DE JESÚS VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, que la pareja LARA ZAPATA convivió bajo el mismo techo desde mayo de 2012, en un inmueble que el testigo les arrendaba (min. 37:30 y 53:00), y que si bien abandonaron dicho inmueble años antes del deceso del causante, edujo la juzgadora basada en la sentencia del 22 de septiembre de 2016 que le reconoció al *de cujus* incrementos pensionales por tener a cargo a la interviniente excluyente (ibíd. pág. 471-478), que el ánimo de conformar una familia con ayuda y socorro mutuo y acompañamiento espiritual pervivió luego de la separación de residencias (min. 38:00), puesto que pese a que el causante residió en casa de sus padres y hermanos hasta el óbito (min. 40:00), continuó la relación con ánimo de convivencia hasta el fallecimiento (min. 40:30), según se refleja en el escrito suscrito por el causante (ibíd. pág. 175-176) y en la prueba testimonial recabada, de lo cual infiere que la pareja LARA ZAPATA se seguían frecuentando, ayudándose en los gastos generales, y estando pendientes entre ellos. Finalmente, consideró la cognoscente de instancia, que la razón por la cual la pareja no pudo continuar residiendo en la misma casa, fue fundamentalmente económica, debido a que el causante estaba construyendo un apartamento para residir nuevamente bajo el mismo techo con la demandante, y los gastos que ello implicaba le

impedía pagar un arriendo (min. 42:00), consideración que fundamentó en los testimonios practicados en la investigación administrativa adelantada por Colpensiones (min. 49:00). Inferencias probatorias que son confutadas por el apoderado judicial de COLPENSIONES, quien afirma que según las pruebas aportadas, la interviniente no convivía con el causante al momento del óbito.

No obstante dicha argumentación de opugnación, resalta la Sala, la *a quo* determinó que si bien la pareja LARA ZAPATA no residía en la misma casa de habitación al momento del óbito, tal separación física se debió a razones económicas, pues pese a ello continuó el ánimo de ayuda, socorro mutuo y acompañamiento espiritual, de donde se colige que las objeciones planteadas por el recurrente en forma alguna logran desvirtuar la valoración probatoria de la *a quo*, lo cual bastaría para despachar desfavorablemente el recurso de alzada, en aplicación estricta del principio de consonancia, en cuanto que no le bastaba con alegar a la parte demandante que la interviniente excluyente no residía con el causante al momento del fallecimiento, sino que además debía acreditarse la razón por la cual dicha separación implicó el fin de la ayuda y socorro mutuo y acompañamiento espiritual.

En orden a desentrañar la verdad procesal, observa la Sala que como resultado de la investigación administrativa adelantada por Colpensiones el 7 de febrero de 2018, se estableció que la interviniente excluyente figuró como beneficiaria en salud del causante, desde el año 2012 hasta el fallecimiento de este, que la relación de pareja entre ellos perduró hasta el óbito, que convivieron desde que el causante se pensionó en el año 2012, que durante los últimos 5 años de vida del *de cujus*, se veían siempre juntos, que a pesar de residir en viviendas separadas los últimos años de vida, se quedaban a amanecer juntos frecuentemente (archivo: GEN-COM-CO-2018_1487251-20180208021343), hechos claramente indicativos de que a pesar de la separación de facto, la pareja continuó con el ánimo de conformar una familia, en donde reinó la ayuda, socorro mutuo y acompañamiento espiritual, circunstancias que son corroboradas con la atestiguación rendida por JHON MARIO LONDOÑO TABORDA (min. 42:30), quien afirmó que luego de que la pareja LARA ZAPATA tuviera que abandonar el apartamento que les arrendaba el señor WILLIAM VELÁSQUEZ, el causante le pagaba \$200.000 por el alquiler de una habitación en la cual residía la interviniente y en la cual frecuentemente se quedaba también el causante, a más de ratificar que a pesar de que el causante trabajaba y se quedaba durmiente también en la casa de sus padres y hermanos, siempre continuó ayudando a la interviniente, al punto que los vecinos de vieja data los reconocían como compañeros permanentes,

puntualizando además que el causante estaba construyendo una vivienda propia en el inmueble donde residía con sus padres y hermanos (min. 56:30), siendo esta la razón por la cual no residían permanentemente en una casa exclusivamente para ellos.

De suerte que, habrá de confirmarse la decisión de la *a quo*, en cuanto determinó que la separación temporal de la pareja LARA ZAPATA obedeció a razones estrictamente económicas, pero que persistió el ánimo de conformar una familia, con apoyo y socorro mutuos y acompañamiento espiritual.

Por su parte, el apoderado judicial de la interviniente excluyente, no comparte las conclusiones probatorias de la *a quo* respecto de la convivencia de la pareja LARA ZAPATA, arguyendo al efecto que el causante manifestó en un documento que había convivido 15 años con la interviniente excluyente, por lo que el porcentaje de la pensión que le corresponde a su poderdante es del 60 % y no al 20 % definido por la *a quo*, razonamiento frente al cual primeramente ha de observarse, en gracia de discusión, que como la cónyuge supérstite del causante convivió con este 22 años, aún bajo el supuesto de que la interviniente excluyente hubiere convivido con el *de cujus* 15 años, el porcentaje de la pensión que le correspondería a ésta última apenas sería del 40 % basado en una aritmética básica.

Al margen de lo anterior, centrándonos en la acusación de la alzada interviniente, se advierte del haz probatorio en recaudo que efectivamente el señor LUIS ALBERTO LARA HERRERA señaló en un documento privado que a su muerte deseaba dejarle su empresa de aseo a la interviniente excluyente, aseverando además que llevaba 15 años de convivencia con ésta (ibíd. pág. 175); sin embargo, un análisis más exhaustivo de tal documento a la luz de la sana crítica en racional y libre persuasión, según lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y de la SS, permite concluir que el *de cujus* plasmó afirmaciones que no concuerdan con la realidad, toda vez que, como quedó dicho, la pareja LARA ZAPATA no residía en el mismo lugar de habitación al momento del óbito, por encontrarse el causante construyendo un apartamento para residir con la interviniente, y por ello no contaba con los recursos económicos suficientes para sufragar una casa de habitación para ambos.

Desatinos que permiten concluir, sin hesitación alguna, que lo plasmado en el documento privado en cuestión obedeció más a un ánimo de favorecimiento del causante hacia la interviniente excluyente, que a reflejar la realidad de la relación de pareja del causante, máxime si se tiene en cuenta que de dicha documental también se

extrae una meridiana animadversión del causante hacía la demandante, probablemente debido a la denuncia penal que ésta y su hija instauraron contra el *de cujus* por el delito de acto sexual con menor de 14 años (ibíd. págs. 261-397), lo que, desde luego, impide dar crédito ciego a las afirmaciones contenidas en dicho documento. En esa medida, queda sin asidero el referido argumento de la alzadista, y habrá la Sala de impartir confirmación a la sentencia que se revisa en punto a que la convivencia de la pareja LARA ZAPATA perduró por poco más de 5 años, y por contera, a los porcentajes o porciones que consecuentemente les asignó la *a quo* a la demandante y a la interviniente excluyente sobre la mesada pensional.

En cuanto a la excepción de prescripción del derecho postulada oportunamente por el COLPENSIONES, tenemos que las mesadas pensionales se generaron a partir del fallecimiento del causante el 20 de diciembre de 2017, instaurándose la demanda principal y la de intervención excluyente el 3 de mayo y el 26 de julio de 2018 (ibíd. págs. 29 y 143), es decir, dentro de los tres años con que contaban la demandante y la interviniente para la reclamación judicial de su derecho, acorde con la prescripción trienal prevista en los artículos 151 del estatuto instrumental laboral y 488 del sustantivo.

La cuantía de la mesada por reconocer para el año 2021 es de \$1.125.433, conforme a la cuantía de la mesada pensional reconocida al *de cujus* mediante Resolución n.º 104037 del 14 de mayo de 2012 (ibíd. pág. 408), y según el IPC certificado por el DANE año a año, tal y como se indica en la tabla de Excel que se aneja a este proveído. Advirtiéndose que la pensión se reconocerá teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales al año, en tanto si bien la prestación que percibía el causante LUIS ALBERTO LARA HERRERA se causó antes del 31 de julio de 2011 y en cuantía inferior 3 SMLMV (ibíd. pág. 407), y por ello se reconoció y pagó teniendo en cuenta 14 mesadas pensionales al año a voces del Acto Legislativo 1 de 2005, también es cierto que la *a quo* determinó que la pensión de sobrevivientes debía reconocerse y pagarse teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales por año (min. 56:30), sin que tal punto fuere materia de censura en la sustentación de la alzada por las partes, debiéndose, entonces, confirmar la decisión de instancia en virtud a que este punto se estudia únicamente en el grado jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES.

Ahora, dado que de conformidad con el artículo 283 del C.G.P, la condena se debe extender hasta la sentencia de segunda instancia, se deberá reconocer como retroactivo desde el 20 de diciembre de 2017 y hasta al 28 de febrero de 2021 la suma

de \$42.078.962, divididos en una cuantía de **\$33.663.169** para MARTA OLIVA BLANDÓN GARCÍA y de **\$8.415.792** para ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, conforme la tabla de Excel con que se glosa esta sentencia, ordenándose que a partir del 1º de marzo de 2021 COLPENSIONES deberá cancelar una mesada pensional en cuantía de \$1.125.433, dividida en un 80 % (**\$900.347**) para MARTA OLIVA BLANDÓN GARCÍA y en un 20 % (**\$225.087**) para ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, la cual se incrementará anualmente conforme lo previene el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, se confirmará la decisión de instancia, en el sentido de autorizar al COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional concedido, las cotizaciones que por mandato legal deben hacerse con destino al sistema de seguridad social en salud.

2.2.2. Intereses moratorios

En orden de impartir la confirmación de la sentencia de primer grado en este aspecto, baste anotar que tal pedimento no fue concedido por la cognoscente de instancia, sin que dicho punto fuera objeto de apelación, y como la presente decisión se analiza en el grado jurisdiccional de consulta en favor del COLPENSIONES, no puede estudiarse su procedencia en disfavor de la entidad.

2.2.3. Indexación

Finalmente, COLPENSIONES deberá reconocer la indexación de cada una de las mesadas pensionales causadas del retroactivo aquí ordenado, así como de las mesadas pensionales que se siga causando hasta el momento del pago efectivo de la obligación, como quiera que la devaluación de la moneda constituye un hecho notorio en el mercado monetario colombiano, siendo procedente tal condena, habida cuenta de que las sumas objeto de condena aún no han ingresado al patrimonio de la demandante y la interviniente y cuando ello se verifique se habrán visto menguadas.

2.3. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de la señora ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y a favor de COLPENSIONES y de MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$454.263, equivalente a medio (1/2) SMLMV, a favor de cada una de las accionadas. Sin costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES,

teniendo en cuenta que si bien incoó el recurso de alzada, la decisión de instancia se revisó integralmente en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor del ente de seguridad social accionado. Las de primera se confirman.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 11 de marzo de 2020 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará de la siguiente manera:

***“SEGUNDO: CONDENAR** a COLPENSIONES a pagar a las señoras MARTA OLIVA BLANDÓN GARCÍA y ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, como retroactivo desde el 20 de diciembre de 2017 y hasta al 28 de febrero de 2021 la suma de \$42.078.962, divididos en una cuantía de \$33.663.169 para MARTA OLIVA BLANDÓN GARCÍA y de \$8.415.792 para ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ. A partir del 1º de marzo de 2021 COLPENSIONES deberá cancelar una mesada pensional en cuantía de \$1.125.433, dividida en un 80 % (**\$900.347**) para MARTA OLIVA BLANDÓN GARCÍA y en un 20 % (**\$225.087**) para ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ, teniendo en cuenta 13 mesadas pensional por año, la cual se incrementará anualmente conforme lo previene el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.*

***Parágrafo 1º:** COLPENSIONES deberá reconocer la indexación de cada una de las mesadas pensionales causadas del retroactivo aquí ordenado, así como de las mesadas pensionales que se siga causando hasta el momento del pago efectivo de la obligación.*

***Parágrafo 2º: AUTORIZAR** a COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional, así como de las mesadas que se sigan causando, las cotizaciones que por mandato legal deben hacerse con destino al sistema de seguridad social en salud.”*


SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia materia de estudio.


TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la señora ANA TERESA ZAPATA GUTIÉRREZ y a favor de COLPENSIONES y de MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$454.263** a favor de cada una de las accionadas. Las de primera se confirman.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.


Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial
Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Secretario Sala Laboral

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 45** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 15 de marzo de 2021, y pueden consultarse en <https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario